TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Sincelejo, catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Ponente: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS

REFERENCIA:	**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**
M. DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO**
RADICADO:	**70-001-33-33-004-2015-00328-01**
DEMANDANTE:	**JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA.**
DEMANDADO:	**COLPENSIONES**

OBJETO DE LA DECISIÓN

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, la cual resolvió conceder las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA[1]

El señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, solicitando que se declare, la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. GNR 375303 de octubre 22 de 2014; Resolución No. GNR 255689 de agosto 24 de 2015; y Resolución No. VPB 70513 de noviembre 17 de 2015, expedidos por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, en adelante COLPENSIONES.

A título de restablecimiento del derecho, pretende que**: (i)** se reconozca y cancele la reliquidación de la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA, desde la fecha de su causación el 9 de agosto de 2013 hasta su inclusión en nómina; **(ii)** se cancelen las mesadas pensionales dejadas de cancelar en el período correspondiente del 9 de agosto de 2013 al 1º de marzo de 2014; **(iii)** que los valores que resulten de la condena sean liquidados e indexados en virtud del artículo

[1] Fols. 1 – 12 C. Primera Instancia.

192 del CPACA, así como se condene en costas procesales y agencias en derecho a la entidad demandada.

Como **fundamentos fácticos,** en la demanda se afirmó que:

El señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA estuvo vinculado al servicio público en calidad de empleado público, durante un tiempo superior a los 20 años, en el cual efectuó sus aportes al sistema de seguridad de pensión ante COLPENSIONES.

El 31 de enero de 2000 se desvinculó del sector oficial, fecha para la cual ya había cotizado más de 20 años en el régimen de prima media con prestación definida, quedando pendiente hasta ese momento el requisito de la edad para acceder al derecho pensional.

El señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA nació el 9 de agosto der 1958, por lo que el requisito de la edad para acceder a la pensión (55 años) que le hacía falta, se cumplió el 9 de agosto de 2013.

Se dice que el señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para la fecha en que entró en vigencia esa normativa, tenía más de 15 años de cotización al régimen de prima media con prestación definida.

Pese a que se desvinculó del servicio oficial el 31 de enero de 2000, el señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA, quien aún no tenía la edad para acceder a la pensión de jubilación, se vinculó al sector privado por un interregno de 1674 días, en los cuales realizó aportes a pensión en el mismo régimen gobernado por COLPENSIONES.

COLPENSIONES a través de Resolución No. GNR 57457 del 25 de febrero de 2014, ordenó reconocer la pensión de vejez al señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA, bajo los lineamientos pensionales de la Ley 33 de 1985, pero aplicados según el parecer del actor de forma parcial, pues solo tuvo en cuenta para acceder a ese beneficio los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto, pero la liquidación de la base pensional se produjo conforme las previsiones del inciso 3º del artículo 36 d de la Ley 100 de 1993, quedando de esta manera mal liquidada la pensión. Aunado a esto, el derecho pensional le fue reconocido desde el 1º de marzo de 2014 fecha en que fue incluido en nómina, y no a partir del 9 de agosto de 2013 tiempo en que cumplió la edad de 55 años, lo que consolidó su status pensional.

Mediante derecho de petición elevado el 7 de abril de 2014, el señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA solicitó a COLPENSIONES el pago del retroactivo pensional desde el 9 de agosto de 2013 hasta el mes de febrero de 2014, así como la reliquidación de las mesadas pensionales teniendo en cuenta los salarios y factores salariales devengados durante los últimos 12 meses de servicio al Estado, dando plena aplicabilidad a las previsiones de la Ley 33 de 1985.

Dicha solicitud fue resuelta de manera negativa por aquella entidad mediante Resolución No. GNR 375303 del 22 de octubre de 2014, contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

COLPENSIONES mediante Resolución No. GNR 255689 de agosto 24 de 2015, resolvió el recurso de reposición impetrado, ordenado la reliquidación de la pensión de vejez en comento, y negó el pago del retroactivo de las mesadas causadas desde el 9 de agosto de 2013 al mes de febrero de 2014.

En ese orden, posteriormente, se expidió la Resolución No. VPB 70513 de 17 de noviembre de 2015, en la cual se resolvió el recurso de apelación modificando la Resolución No. GNR 255689 de agosto 24 de 2015 en el sentido de reliquidar nuevamente la mesada pensional a partir del 1º de marzo de 2014, sin que aparentemente se dé explicaciones del resultado de la nueva reliquidación.

COLPENSIONES en las resoluciones atrás anunciadas, al momento de liquidar la pensión del señor JULIO RAMÓN DE LA OSSA TEJADA, no tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales percibidos durante los últimos 12 meses al servicio del Estado, esto es, del 1 de febrero de 1999 al 31 de enero de 2000 como empleado público del INAT, como tampoco se le reconoció tal derecho a partir de adquirir el status pensional el 9 de agosto 2013, fecha para la cual tenía más de 20 años de servicio al Estado y la edad de 55 años.

Como ***normas violadas***, señaló las Leyes 33 y 62 de 1985, artículos 33, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y los artículos 29, 53 y 93 de la Constitución Política. En el ***concepto de violación,*** se señaló que debe emplearse la norma pensional más a favorable a sus intereses que viene siendo la Ley 33 de 1985, dándosele aplicación absoluta e integral en cuanto a la forma de liquidación, concretamente, a la base de liquidación pensional donde se incluyan todos y cada uno de los factores salariales devengados en el último año en que estuvo vinculado con el Estado.

1.2. ACTUACIÓN PROCESAL.

Durante el trámite del proceso se surtieron las siguientes etapas:

- Presentación de la demanda: 15 de diciembre de 2015 (Folio 12 C. Principal).
- Admisión de la demanda: 17 de marzo de 2016 (Folio 50 C. Principal).
- Notificación a las partes: 2 de mayo de 2016 (Folios 55-58 C. Principal).
- Contestación a la demanda: 14 de julio de 2016 (Folio 66-71 C. Principal).
- Acta de audiencia Inicial con Sentencia: 23 de noviembre de 2016 (Fol. 97-105 C. Principal).
- Recurso de apelación: 7 de diciembre de 2016 (Folio 110-112 C. Principal).
- Audiencia de conciliación y concesión del recurso de apelación: 23 de febrero de 2017 (Folio 124 C. Principal).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA[2]

La entidad accionada se opuso a todas las pretensiones de la demanda fundamentándose en que no es posible acceder a lo pretendido ya que el actor si bien se le reconoció la pensión de vejez conforme los parámetros de la Ley 33 de 1985, para obtener el ingreso base de liquidación de la prestación, se tenían que tener en cuenta los factores salariales establecidos en los artículo 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 1º del Decreto 1158 del 13 de junio de 1994.

Adujo que el demandante reportó cotizaciones con el empleador TRANSPORTE PROGRESO CTA, para el período 2013, sin reportar la respectiva novedad de retiro con aquel, por lo que COLPENSIONES incluyó la pensión en nómina a corte de nómina, teniendo de esta manera ajustada a derecho el reconocimiento pensional.

A su vez, expuso que no era posible atender la premisa referida a la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio en la liquidación de la pensión, pues, eso hace parte del componente de la determinación del IBL, y al estar excluido dicho aspecto del régimen transición, debe darse aplicabilidad absoluta a la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentaria, entre ellas, el Decreto 1158 de 1994 norma que incorporó a los servidores públicos al actual sistemas general de pensiones. Por lo tanto, el actor solo tiene derecho a que el ingreso base de liquidación se calcule con base en los factores devengados y que textualmente señalados en el Decreto 1158 de 1994.

[2] Fols. 66-71 C. Ppal.

Propuso como excepciones: **(i) inexistencia de las obligaciones reclamadas** en tano que el reconocimiento de la pensión de vejez se ajustó a los lineamientos de la Ley 33 de 1985. **(ii) improcedencia para reliquidar la pensión de jubilación** bajo el argumento que el cálculo del IBL de la prestación está exenta de transición, por lo que las reglas aplicables son las contenidas en la Ley 100 de 1993. **(iii) prescripción** en caso que se encuentren afectadas las mesadas pensionales por este fenómeno, debe ser declarado.

1.4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA[3]

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, accedió a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Afirmó que atendiendo la sentencia de unificación de fecha 25 de febrero de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, se tiene que la liquidación de las pensiones que rijan por normas anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, debe efectuarse en su integridad bajo los parámetros de la norma especial, y no conforme a la preceptiva general de pensiones, ya que el cálculo del IBL también hace parte del régimen de transición, por lo tanto no es dable aplicar de forma fragmentada dicho beneficio en el sentido que respecto de algunos requisitos se emplee la ley especial de pensión, y en relación a la base de liquidación se acuda a la normas generales de las ley 100 de 1993.

En ese orden, para las pensiones que se rigen por la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición, el ingreso base de liquidación está determinado por el promedio de todos los factores salariales devengado por el servidor público antes del retiro del servicio, aplicando sobre esto una tarifa o tasa de reemplazo del 75%.

Siendo así, para el caso concreto afirmó que se encontró acreditado que el demandante cotizó en empresas del sector privado hasta el 31 de agosto de 2013, no existiendo pruebas que indiquen que posteriormente hizo aportes con destino al sistema de seguridad social en pensión, por lo tanto, en virtud de los artículo 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, es necesario que el usuario no éste laborando activamente para efectos de ser beneficiarios de la pensión, pues no puede tener simultáneamente las dos condiciones (cotizante y pensionado) por ser incompatibles entre sí. De modo que el reconocimiento pensional del accionante debe contarse desde el 1º de septiembre de 2013 y no desde el 1º de marzo de 2014 como

[3] Fols. 97-105 C. Ppal.

lo sostiene COLPENSIONES pues no hay pruebas que avizoren que el actor haya seguido cotizando en el sistema hasta ese periodo.

Por otro lado, sostuvo el A quo que las resoluciones acusadas no indican cuales fueron los factores salariales que se tuvieron en cuenta como base para liquidar y reliquidar la pensión de vejez otorgada al actor, sino que se produjo con base en el ingreso base de liquidación contemplado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, por lo que se entiende que no se tuvo en cuenta todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicios, como son: sueldo, almuerzo, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de junio, prima de servicios, quinquenio, prima de diciembre, lo que va en contra vía de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.

Por último manifestó que las mesadas no se encuentran prescritas por cuanto desde la reclamación administrativa hasta la interposición de la demanda, no transcurrieron más de tres (3) años, por ende, no se acreditó la excepción de prescripción propuesta por la demandada.

1.5. EL RECURSO DE APELACIÓN[4]

La parte demandada inconforme presentó recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, señalando que la pensión de vejez reconocida al actor en los actos administrativos que se demandan en esta oportunidad, se ajustó a los parámetros de la norma más favorable aquel como es la Ley 33 de 1985, por lo que no hay lugar a la reliquidación pretendida máxime si se tiene en cuenta que el cálculo de base de liquidación de la pensión debe realizarse conforme las reglas de la Ley 100 de 1993, y no las previstas en la Ley 33 de 1985, como quiera que este factor se encuentra por fuera del régimen de transición tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en sentencias C – 258 de 2013 y SU – 253 de 2015.

1.6. TRAMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA – CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

En auto del 28 de abril de 2017 se admitió el recurso de apelación. Posteriormente en providencia del 9 de junio 2017 por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso

[4] Fls. 110-112 C. Ppal.

correr traslado para que las partes presentaran alegatos por escrito y concepto del Ministerio Público[5].

En esta etapa procesal, la parte demandante presentó escrito de alegaciones aduciendo y ratificando la postura expuesta en el libelo de demanda[6].

Se advierte que en esta instancia, la entidad demanda no presentó escrito de alegatos, ni el Delegado del Ministerio emitió concepto[7].

2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. LA COMPETENCIA. El Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta en el presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Con fundamento exclusivamente en el planteamiento expuesto por COLPENSIONES en el recurso de apelación, el cual marca la pauta de competencia de segunda de instancia de esta Corporación con fundamento en los artículos 320 y 328 del CGP, entra el Tribunal a dilucidar, ¿*si el demandante en su condición de beneficiario de la transición pensional establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento y pago de la reliquidación de pensión de jubilación, teniendo en cuenta el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985*?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes temas: **i)** La vigencia del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993 y la aplicabilidad del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la misma, **ii)** Ingreso base de liquidación y factores salariales establecidos legalmente que conforman la base de liquidación pensional y su interpretación jurisprudencial, **iii)** El caso concreto.

I. LA VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES CONSAGRADO EN LA LEY 100 DE 1993 Y LA APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA MISMA.

El sistema general de seguridad social, incluyendo el sistema general de pensiones, empieza a consolidarse en Colombia con la expedición y vigencia de la Ley 100 de 1993

[5] Folios 1- 9 del cuaderno de segunda instancia. Asimismo, constancia Secretarial a folio 16.
[6] Folios 13-14 cuaderno de segunda instancia.
[7] Nota Secretarial a folio 15 del cuaderno de segunda instancia.

"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

En la mencionada normativa, y para el estudio de su aplicabilidad a fin de respetar, por una parte, los derechos adquiridos y, por otra, las expectativas legítimas de las personas que habían consolidado su derecho antes de la entrada en vigencia o hubieran empezado su régimen de pensión con anterioridad a su aplicabilidad, es necesario integrar los artículos 36 y 151 de la ley en comento.

El primero de ellos consagra como supuestos de hecho para la aplicación de la transición y por tanto de la normativa vigente con anterioridad, el tener 40 años o más para los varones, o 15 o más años de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema. La segunda de las normas establece la vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel nacional, desde el 1 de abril de 1994.

Por lo anterior, para determinar la normativa aplicable para la liquidación de la pensión de vejez ha de establecerse en cada caso si el potencial pensionado goza del régimen anterior o del de transición.

El artículo citado permitió el efecto en el tiempo de normas anteriores a la entrada en vigencia de la nueva normatividad, que para el caso de los empleados del sector público[8], deviene fundamentalmente en la Ley 33 de 1985, que exige para acceder la pensión de vejez 55 años de edad, 20 años de servicios y contempla una tasa de remplazo de la mesada equivalente al 75% del ingreso base de liquidación.

El H. Consejo de Estado refiriéndose al régimen de transición para los empleados públicos, ha señalado:

> *"Conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quienes para el 1º de abril de 1994 - fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 - tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, se les aplicará el régimen anterior al cual se hallaban afiliados, esto es, en cuanto a la edad para acceder a la pensión de jubilación, al tiempo de servicio y al monto de la prestación. Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante se hallaba dentro del régimen de transición, pues reunía los dos presupuestos exigidos en la norma legal y por tanto debió aplicársele el régimen anterior. Es claro entonces que el demandante tiene derecho a que se le aplique en su integridad el régimen consagrado en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, primero, por encontrarse dentro del régimen de transición y, segundo, por haber adquirido el status de pensionado el 13 de octubre de 1993. La aplicación del régimen anterior*

[8] Con alguna excepciones, como lo sería el caso de los miembros de la Rama Judicial y la ley 71 de 1988, que reguló la pensión de jubilación por aportes.

se hace en forma integral y no parcial, por lo cual no es aplicable en este asunto, y referente a la materia objeto de discusión, la Ley 100 de 1993"[9]

En tal sentido, los elementos que forman parte del régimen de transición pensional son: el tiempo de servicio, la edad y el monto de la pensión, las cuales como vimos deben ser tomados de la Ley 33 de 1985, lo que incluye la forma de determinar el salario base de liquidación, habida cuenta que es la norma jurídica vigente a la fecha de consolidación del derecho a la pensión.

II. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN Y FACTORES SALARIALES ESTABLECIDOS LEGALMENTE QUE CONFORMAN LA BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL Y SU INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL.

El H. Consejo de Estado[10], refiriéndose al ingreso base de liquidación, ha manifestado que este hace parte del monto de la pensión de vejez, de tal suerte que, el ente gestor al aplicar la tasa de remplazo, no debe tomar la preceptiva del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino la que disponga la norma que por vía transicional corresponda, por cuanto liquidar la pensión tomando el monto de una norma y la base de liquidación de otra, sería vulnerar el principio de Inescindibilidad.

Entonces, siendo el IBL parte integrante del monto de la pensión, la mesada pensional debe ser liquidada tanto en su monto como en su base salarial con fundamentos en la norma que por vía de transición se aplique, para el caso que nos ocupa, repetimos la Ley 33 de 1985 y la cual establece que corresponde al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios[11].

Las normas aplicables para efectos de determinar el salario de liquidación son las Leyes 33 y 62 de 1985, y es en esta misma normativa donde se señalan los factores salariales que se han de tener en cuenta para conformar la base de liquidación pensional.

Al respecto el artículo 3 de la norma referenciada, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, establece la forma cómo se liquidaría la pensión de jubilación señalando los siguientes factores:

- Asignación básica.

[9] Consejo de Estado. Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2002-01420-01(5852-05). 7 de junio de 2007. CP. Alejandro Ordoñez Maldonado. Demandado: Cajanal. Argumento que ya había sido expuesto en Sentencia del 21 de septiembre de 2006, expediente No. 25000-23-25-000-2002-04260-01(872-05), señalándose que, para los empleados públicos de todos los órdenes, la norma aplicable por vía de transición es la Ley 33 de 1985.
[10] Ver entre otras las siguientes sentencias de la Sección Segunda: Sentencia del 16 de febrero de 2006, radicación número: 25000-23-25-000-2001-01579-01(1579-04). Sentencia del 23 de 2006, radicación número: 25000-23-25-000-2001-07475-01(1406-04). Sentencia del 26 de enero de 2006, radicación número: 25000-23-25-000-2002-05558-01(2985-05)
[11] Consejo de Estado en la sentencia del 25 de marzo de 2010, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 66001-23-31-000-2006-00452-01(1415-07) C.P. Luís Rafael Vergara Quintero.

- Gastos de representación.
- Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación.
- Dominicales y feriados.
- Horas extras.
- Bonificación por servicios prestados.
- Trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

No obstante lo anterior, se han expuesto varias interpretaciones por la jurisprudencia frente a cómo se debe efectuar la liquidación y los factores a tener en cuenta para ello, en primer lugar se consideró que al momento de liquidar la pensión debían incluirse todos los factores salariales devengados por el trabajador; en otras se expresó que solo podrían incluirse aquellos sobre los cuales se hubieren realizado los aportes; y finalmente se expuso que únicamente podían tenerse en cuenta los taxativamente enlistados en la norma.

Lo dicho, dado que no obstante la claridad de la norma estudiada de forma aislada, existen otras normas que consagran diferentes medios remunerativas del servicio que son salario por disposición expresa del legislador o su naturaleza, por lo que en aplicación de los principios generales del derecho laboral de primacía de la realidad sobre la forma y de favorabilidad, han de interpretarse de manera integral para así establecer qué factores constituyen en realidad salario y liquidar la pensión con los ingresos efectivamente percibidos por el trabajador en su vida laboral active.

Por otro lado, se relieva la interpretación que de la Ley 33 de 1985 ha realizado el CONSEJO DE ESTADO en especial al tema del salario base de liquidación de la pensión, posición que la Sala comparte, y para lo cual se permite transcribir en su aparte más importante:

> *"En atención al citado precedente, es preciso aclarar que, la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos; sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiado su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.*
> *…*
> *a) De los factores de salario para liquidar pensiones.*

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, precisó el sentido y alcance de las expresiones salario y factor salarial, así:
"(…) El salario (…) aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador (…)". En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) "constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que "además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios."
(…)
Según el artículo 42 ibídem son factores de salario, y por ende deben entenderse como una retribución o contraprestación directa por los servicios que presta el trabajador : la asignación básica, el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación, la prima de servicio, la bonificación por servicios prestados y los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.(…)."

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.

Sobre el particular es pertinente aclarar, que existen algunas prestaciones sociales - a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación -, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

No desconoce la Sala que el mencionado decreto no es aplicable al sub-lite, tal y como ya se expuso en consideraciones precedentes, por cuanto el presente asunto se rige por la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; empero, constituye un referente normativo que demuestra el interés del legislador de tener dichas primas como factores de salario que se deben incluir al momento de efectuar el reconocimiento pensional[12].[13]

[12] Al respecto, ver el concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
[13] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). Actor: LUIS MARIO VELANDIA. Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Destaca la Sala que esta no es una posición aislada de la mencionada Alta Corporación, sino que es la línea que se consolida a partir de allí tal como se puede observar en decisiones más recientes[14].

Para esta Corporación, el salario base de liquidación de la pensión debe incluir todos aquellos pagos que conforme a su naturaleza o norma especial son salario, posición uniforme, reiterada y pacífica a la fecha en nuestra jurisdicción; es importante tener en cuenta en este punto, lo referente a la posición jurisprudencial de la H. CORTE CONSTITUCIONAL, vertida en la sentencia SU-230 de 2015.

En primer lugar, la Sala parte de la base, como ya se expresó, que la posición de esta jurisdicción y de su órgano de cierre, es la de aplicar todos los elementos del régimen anterior, a quienes gozan del régimen de transición (edad, monto, entendido este como tasa de reemplazo e IBL), lo anterior, atendiendo que de la interpretación sistemática de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así se infiere del texto mismo de la primera de ellas, pues define el IBL de las pensiones previstas en sistema general de seguridad social en pensiones, es decir, las del régimen de transición no se regulan por esta normativa sino por las anteriores.

Igualmente, para la Sala, es claro que la posición asumida por la H. CORTE CONSTITUCIONAL en las sentencias en cita (C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), posee una clara aplicación restrictiva, por las siguientes razones:

1. La sentencia C-258 de 2013, estudia la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, es decir, el régimen pensional de Representantes a la Cámara y Senadores, extensivo a Magistrados de Altas Cortes (artículo 28 del Decreto 104 de 1994) y ciertos funcionarios de la Rama Judicial, el Ministerio Público y órganos de control, como el Procurador General de la Nación (artículo 25 del Decreto 65 de 1998), el Fiscal General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y los Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (artículo 25 del Decreto 682 de 2002). La argumentación sobre cómo interpretar el ingreso base de liquidación de las personas que gozan de régimen de transición, se limita

[14] Como decisión de este tipo, la Sala trae para soportar la siguiente: "Al examinar con detenimiento la anterior cita jurisprudencial (se refiere a la citada en el píe de página anterior), es claro que la entidad demandada debió efectuar los aportes que devengó el actor mientras estuvo prestando sus servicios sobre los factores salariales y que pretende se tengan en cuenta." (La nota entre paréntesis no es del texto original) CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. CONSEJERO PONENTE: DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Sentencia del 20 de marzo de 2013. REF: EXPEDIENTE No. 76001233100020070021701. NÚMERO INTERNO: 03412012. ACTOR: JOSÉ OMAR GONZÁLEZ CRUZ. AUTORIDADES NACIONALES.

a estos funcionarios, por lo que en este aspecto esta sería la *ratio decidendi* de la sentencia, y frente a cualquier otra aplicación o argumentación que en ella se contiene en torno al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la misma claramente sería *obiter dicta*, dado que este no es el fondo de la situación estudiada por la Corte.

2. El sustento evidente de la sentencia C – 258 de 2013, es la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia, en tanto, las excesivas pensiones, percibidas por los funcionarios atrás mencionados, resultaron afectándolo y quebrando la balanza que lo debe regir (homeóstasis). Si esta es la consideración, en casos como el tratado, si de aplicación analógica se trata, debería acudirse a efectuar un análisis similar, esto es, establecerse si pensiones como las de la parte accionante, afectan la sostenibilidad del sistema pensional, para lo cual, es evidente que ello solo sería posible, si se determinara que el pago de esta pensión es desproporcionada, lo cual exige una carga probatoria, que en este proceso no existe, por ende, no es susceptible de consideración y valoración.

3. En este mismo sentido, al no estar la CORTE CONSTITUCIONAL estudiando la constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia ya referida, la interpretación que de esta norma hace la Corte no es *ratio decidendi* y por ello carece de la fuerza vinculante obligatoria que poseen sus fallos[15], dicha interpretación [16].

4. En la SU-230 de 2015, se estudia una tutela en contra de la Sala Laboral de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, quien interpreta de tiempo atrás que el monto consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es lo referente al porcentaje o tasa de reemplazo y no al Ingreso Base de Liquidación, y la CORTE CONSTITUCIONAL en la sentencia en estudio de forma clara establece que esta interpretación es acorde a la constitución, ello *per se* no excluye otro tipo de interpretaciones en torno a dicha norma, pues de lo contrario se borraría de un

---

[15] Consagra la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia: *"ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:*
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.
…"

[16] *"En cuanto a la existencia de cosa juzgada constitucional indica que según el artículo 243 superior "los fallos que dicte la Corte hacen tránsito a cosa juzgada"; que el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 ordena rechazar "las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada" y que el artículo 21 del mismo Decreto se refiere al carácter obligatorio de esas decisiones tanto para las autoridades como para los particulares, así como el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, señala que la parte resolutiva de las sentencias tiene carácter obligatorio y de efecto "erga omnes"."* CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1299 de 2005.

tajo la independencia como pilar de la función judicial.

5. El CONSEJO DE ESTADO, en sentencia de unificación, limitó de forma clara la aplicabilidad de la sentencia C-258 de 2013, a aquellas pensiones que sean adquiridas después de la vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005[17].

6. En caso de que la norma (el artículo 36 de la Ley 100 de 1993) genere duda en su interpretación, la misma debe solventarse a favor del trabajador, en aplicación del principio general del derecho laboral del *in dubio pro operario*, consagrado en el artículo 53 de la C.P.

7. Con fundamento en el mismo principio, toda interpretación que se haga de las fuentes formales del derecho, y la jurisprudencia lo es conforme lo consagra el C.P.A.C.A. y lo ha interpretado de forma unánime la H. Corte Constitucional[18], debe realizarse a favor del trabajador, por lo que existiendo posiciones jurisprudenciales que soportan las dos interpretaciones estudiadas (el monto no incluye el IBL por lo que este se encuentra regido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 – el monto incluye porcentaje e IBL por lo que este se encuentra regulado por la normativa anterior) debe aplicarse la que favorece el derecho en discusión del trabajador, es decir, para el caso concreto la segunda de las interpretaciones del alcance del IBL.

8. Suma a favor de la interpretación acá planteada, principio de la inescindibilidad del régimen o la normativa aplicable[19], pues el planteamiento de las últimas providencias referenciadas de la Corte Constitucional, toma elementos del régimen anterior y los amalgama con los de la Ley 100 de 1993, sin aplicar íntegramente una de las normativas.

Finalmente, dada la división de criterios existente y la postura tomada por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada, el H. CONSEJO DE ESTADO fijó su posición

---

[17] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN. CONSEJERO PONENTE: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN (E). Sentencia del 12 de septiembre de 2014. REF: Expediente No. 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014). Actor: GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ. Demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -.

[18] Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001 y relacionada con la obligatoriedad de las sentencias de unificación del CONSEJO DE ESTADO, la sentencia C-634 de 2011.

[19] Sobre este punto, ha dicho la doctrina: *"Ahora bien, como se trata de diferentes regímenes pensionales, debe tenerse presente que la selección de uno u otro comporta la aceptación de todas sus condiciones, sin que sea jurídicamente posible acoger solamente lo favorable de uno y de otro, en razón del principio de inescindibilidad que rige la interpretación de la ley. Código Civil. Art. 31. "Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes".”* CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. Concepto del 9 de marzo de 2006. Radicación 1718.

recientemente a través de sentencia de unificación de fecha 25 de febrero de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de dicha Corporación, en la que reiteró sus criterio respecto de que el monto de las pensiones sometidas al régimen de transición comprende la base y la tasa de remplazo. Sobre el particular consideró:

> *"Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:*
>
> 1. *La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión "monto" contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.*
>
> 2. *Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado "asumirá la deuda pensional que esté a su cargo".*
>
> 3. *Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.*
>
> 4. *La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.*
>
> 5. *Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado "bloque de constitucionalidad", no se predican exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de "monto" en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.*

> *En efecto, si ya la Constitución dispuso la finalización del régimen de transición pensional y queda pendiente, en consecuencia, un volumen de reconocimientos pensionales mucho menor que el que ya tiene decidido el asunto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se ve ninguna afectación del principio de sostenibilidad financiera que imponga el cambio jurisprudencial que plantea la sentencia SU-230 de 2015, y en cambio sí se hace notorio y protuberante el desconocimiento de los principios de igualdad y de progresividad."*[20]

Por lo tanto, para este operador judicial, en ejercicio de su independencia y autonomía, atendiendo los anteriores argumentos, se inclina a aplicar en este caso, la posición del H. CONSEJO DE ESTADO y desecha la de la H. CORTE CONSTITUCIONAL planteada en sus decisiones ya referidas (C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), concluyendo que el monto incluye el Ingreso Base de Liquidación de la pensión, el que se encuentra regido por las normas anteriores, para nuestro caso, las Leyes 33 y 62 de 1985.

De otra parte, debemos señalar que, no se acompasa con las cláusulas que fundan la Carta Política de 1991 -el Estado Social de Derecho- ni con el principio de confianza legítima, que se pretenda aplicar un cambio jurisprudencial abrupto, intempestivo, inesperado, repentino y trascendental para esta jurisdicción, a quien acudió a la vía judicial con la convicción legítimamente fundada de que sus pretensiones saldrían avantes, más aún si se considera que el petitum se vincula directamente con el derecho fundamental a la seguridad social, cuya importancia resulta evidente, como lo destaca la misma Corte Constitucional*:*

> *"La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva "de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad". T-164/13 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub*

Frente a la aplicación de la tesis expuesta por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 17 de marzo de 2017, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, se reitera en su precedente judicial frente al tema de factores

[20] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, Exp. No. 25000234200020130154101 (4683-2013), M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

salariales de pensiones que se reconocen con fundamento en la Ley 33 de 1985, señalando:

> *"De lo relatado anteriormente, se vislumbra sin hesitación alguna que el ingreso (salario) base de liquidación en materia pensional se debe efectuar sobre lo realmente devengado, y también una de las obligaciones, es cotizar durante la vida laboral y hacer los correspondientes descuentos sobre todo lo que constituye salario o ingreso. Se reitera salario es: todas las sumas que* ***habitual y periódicamente*** *recibe el empleado como retribución por sus servicios, se debe cotizar sobre lo realmente percibo y liquidar las prestaciones sociales sobre todo lo devengado.*
>
> *Así, la omisión del empleador al efectuar los descuentos, no puede afectar el derecho pensional, de la parte más débil de la relación laboral, pues es su obligación hacerlo, sobre el salario realmente devengado, como ha quedado establecido; de esa manera contribuir no sólo con la efectividad de los derechos fundamentales del pensionado, en condiciones dignas, sino con el equilibrio de las finanzas públicas y el bienestar general.*
>
> *Teniendo en cuenta lo anterior, y revisado el fallo apelado es evidente que A-quo hizo una interpretación favorable y armoniosa de los fundamentos normativos y jurisprudenciales aplicables, habida cuenta que si bien ordenó incluir en el ingreso base de liquidación de la pensión del demandante, los valores correspondientes al subsidio de alimentación, viáticos, prima de de servicios de junio, prima de servicios de diciembre, prima de navidad y prima de vacaciones, factores acreditados en el proceso como realmente devengados en el último año de servicios, por el titular del derecho, también ordenó efectuar los correspondientes descuentos sobre los mismos en caso de que se hubiere omitido. Lo anterior resulta coherente con la tesis dominante que sentó esta corporación y que plasmó en la sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010[21] y subsiguientes.*
>
> *Por lo esbozado, la Sala no comparte el argumento del apelante en el sentido que la sentencia del A-quo, desconoce la sentencia C-258-13 de la Corte Constitucional, no solo por lo anotado en precedencia, sino también, porque si bien es cierto la sentencia en mención y otras como la SU-230-15 y T-615-16, pretende romper la tesis dominante en esta jurisdicción, no lo es menos que en la sentencia del 17 de febrero de 2017[22] esta Corporación reiteró la tesis sostenida especialmente en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 4 de agosto de 2010 y concluyó que la tesis de la sentencia C-258-13 de la Corte Constitucional se originó en el contexto del control abstracto de constitucionalidad de un régimen especial y coyuntural, que extendió con la sentencia SU-530-15 y T-615-16, a todos las situaciones amparadas por el régimen de transición, pero que de aplicarse de tajo a todos los regímenes generales, es desfavorable, atentatorio del concepto de salario, de los principios de progresividad y compromete los derechos fundamentales del pensionado.*
>
> *En esa oportunidad, esta Corporación, detectó, además, que en realidad de verdad el problema trasciende a la mera interpretación de los componente del régimen de transición, y de los régimen pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993; pues es estructural, radica en la noción de salario y la tendencia de adoptar como política pública una posición restrictiva del mismo con el argumento de la estabilidad de las finanzas estales, lo que no es nuevo, sino que remonta a los años ochenta.*

---

[21] Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 4 de agosto de 2010. Radicado. 2006-07509 (0112-2009), *C.P.* Víctor Hernando Alvarado Ardila.
[22] *Radicado: 25000234200020130154101 C.P. César Palomino Cortés-*

Adicionalmente, esta Corporación en sentencia del 26 de noviembre de 2016[23], extendió, los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en el proceso radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009). En esa oportunidad, expresamente reafirmó de manera categórica que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad (principio de inescindibilidad), sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho». Igualmente, expuso las razones por las cuales, la particular interpretación de la sentencia C-230-15, no obliga a las demás Cortes de Cierre"[24]

En proceso radicado número: 11001-03-25-000-2013-01341-00(3413-13) Actor: LUIS EDUARDO DELGADO Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), con ponencia del consejero Gabriel Valbuena, al resolver una solicitud de extensión jurisprudencial, en proveído del 24 de noviembre de 2016, manifestó la Sala Laboral del Consejo de Estado:

"Las tesis plasmadas en las sentencias de unificación proferidas el 4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016 por la Sección Segunda de esta Corporación, se inscriben dentro del sistema de fuentes del derecho y tienen carácter prevalente y vinculante, a la luz de lo dispuesto en los artículo 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011. (…) (vi).- El régimen salarial y prestacional de los servidores públicos no es intangible, se puede modificar; sin embargo, para no vulnerar derechos adquiridos ni expectativas legítimas y ciertas, el ordenamiento jurídico prevé regímenes de transición. El régimen de transición pensional de todos los servidores públicos y privados es inescindible, contempla beneficios que no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad y no se puede aplicar por partes sino en toda su extensión, so pena de crear un régimen híbrido y atípico. De conformidad con las nítidas voces del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el régimen de transición allí contenido comprende edad, tiempo de servicio y monto de la prestación y, en lo que toca con este último punto, ha considerado la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que abarca factores salariales, porcentaje y tiempo a tomar en cuenta para su liquidación. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no contempla el concepto de «tasa de reemplazo», contenido en la sentencia SU 427 de 2016, pero si contempla el de «monto» como elemento constitutivo del régimen de transición. (…) (x).- Aplicar el criterio de la Sección Segunda del Consejo de Estado no violenta el principio de la razonabilidad en la prestación, pues, en suma lo que aquel señala es que los derechos salariales y prestacionales conforman una base integral, siendo la pensión de jubilación el reflejo de esa realidad laboral o como lo ha dicho la propia Corte Constitucional el salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, compuesto por todos los factores que retribuyen sus servicios.

EXTENSION DE JURISPRUDENCIA – Reliquidación pensión de jubilación / RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION – Inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio / SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL – Cambio de postura / REGIMEN DE TRANSICION – Aplicación de la normatividad correspondiente en su integridad / PRINCIPIO DE INESCIDIBILIDAD – Aplicación en el régimen de transición

Esta Sala de Decisión había adoptado como postura jurisprudencial que « [el] problema jurídico [de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010] se centró únicamente en determinar los factores [salariales] que debían componer el ingreso base de liquidación, más no el promedio del tiempo para el cálculo del mismo», y que por ende, este último representaba «un nuevo problema jurídico que no [podía] ser resuelto dentro de la solicitud de extensión de jurisprudencia ya que excede su alcance», en esta oportunidad, en aras de dar efectiva aplicación a los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad (o no regresividad) en materia laboral, se considera procedente cambiar dicha tesis, y reafirmar de manera categórica que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad (principio de inescindibilidad), sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho». Con todo, conviene precisar que el establecimiento de los regímenes de transición obedece al propósito de garantizar la intangibilidad de las

[23] *Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 2016. Radicación número: 11001-03-25-000-2013-01341-00(3413-13). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.*
[24] CONSEJO DE ESTADO Sección Segunda Subsección B. Expediente No. 68001-23-31-000-2011-00949-01(2237-14) Actor: ARNULFO CHAPARRO MARCHÁN. C. P. César Palomino Cortés

expectativas legítimas de quienes se encuentran emplazados en una situación jurídica determinada, con lo cual se quiere evitar que el cambio abrupto del régimen que les era aplicable, acabe defraudando tales expectativas. En ese orden de ideas, quienes se encontraban cobijados por las normas de la Ley 33 de 1985 tenían la expectativa de pensionarse con arreglo a las mismas, en tanto y en cuanto, cumplieran a cabalidad los requisitos en ella previstos, dentro de los cuales no estaba propiamente el de que su prestación (pensión) fuese liquidada tomando en cuenta el promedio de ingresos percibidos en los diez últimos años, sino por el contrario, el promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios. Dicho de otra manera, los regímenes de transición exceptúan de la aplicación, en todo o en parte, del nuevo régimen consagrado en la ley 100 de 1993, más aún, cuando la norma que establece el índice base de liquidación, es una norma a todas luces desfavorable cuya aplicación retroactiva desconocería principios fundantes del derecho laboral"

La Sala considera que seguirá aplicando el precedente jurisprudencial vertical, expuesto por el órgano de cierre de esta jurisdicción, al menos hasta tanto el mismo no sea modificado por el máximo tribunal en materia contenciosa administrativa, sobre aquellos asuntos que ya están en curso, pues está en juego el principio de la confianza legítima.

2.2.1. CASO CONCRETO.

Recapitulando, la parte actora pretende la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en aplicación de los beneficios de la transición pensional permitida por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Siendo así, sobre aquel punto recae el estudio del fondo del asunto, pues el reproche de la demandada apunta directamente a desvirtuar esta premisa, sin que nada se dijese en el recurso de apelación sobre la fecha de causación y pago de la prestación pensional, luego entonces esta arista a no ser objeto de apelación, este Tribunal como juez de segunda instancia abordará exclusivamente la temática referida a la determinación del IBL de la pensión del demandante con fundamento en los factores salariales percibidos en el último de año de servicios, que conlleve a la reliquidación de la pensión de vejez reconocida en su momento por COLPENSIONES.

Clarificado lo anterior, la Sala de Decisión estima que, conforme las premisas sentadas en acápites previos y lo aportado al expediente, la sentencia objeto de alzada debe ser confirmada en atención a las siguientes razones:

Se encuentra acreditado, no siendo motivo de discusión por la entidad accionada, que COLPENSIONES en las Resoluciones GNR 57457 de febrero 25 de 2014, GNR 375303 de octubre 22 de 2014; GNR 255689 de agosto 24 de 2015; y VPB 70513 de noviembre 17 de 2015, reconoce que la situación pensional del actor se encuentra gobernada por las previsiones de la Ley 33 de 1985 dado que cumple con los requisitos para acceder a ella en virtud del régimen de transición, sin embargo, la misma entidad reconoce que

de aquella norma se le aplicaron los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto entendida este como la tasa de reemplazo del 75% y no el cálculo del ingreso base de liquidación, ya que dicha arista está sometida bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, además que tuvo como factores salariales solo aquellos que están estipulados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 siempre y cuando sobre estos se hicieran los respectivos aportes a pensión.

Siendo así, se tiene conforme las razones jurídicas anotadas en antecedencia, que el señor DE LA OSSA TEJADA tiene derecho a que su pensión de vejez, regulada por la Ley 33 de 1985, sea liquidada bajo los parámetros de esta norma, es decir, que la base de liquidación esté compuesta por el promedio de todos los factores salariales devengados en el último de servicio, entendiéndose por salario toda remuneración que habitual y periódicamente percibe en virtud de los servicios prestados a favor de la entidad pública.

Bajo esa óptica, si bien en los actos acusados no se mencionan los factores salariales que tuvieron en cuenta para la liquidación de la prestación, si afirma que se ajustó a los enlistados en el Decreto 1158 de 1994, que son: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados. Por tanto, contrastados estos emolumentos con lo certificado por la *"la coordinadora del grupo de gestión integral de entidades liquidadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural"*[25], se infiere razonadamente que la demandada no tuvo en cuenta los siguientes factores devengados por el accionante entre febrero de 1999 a enero de 2000, a saber:

- Prima de vacaciones.
- Prima de junio
- Prima de servicios.
- Quinquenio.
- Prima de diciembre.
- Almuerzo.

[25] Folio 36 del C.Ppal.

De suerte que los anteriores factores al ser percibido por el actor antes de retirarse del servicio público, deben ser incluidos en el cálculo del ingreso base de liquidación dando aplicación integral al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Se precisa que si bien el demandante devengó la bonificación recreación en aquel interregno, este no reviste la calidad de factor salarial y por tanto no puede ser objeto o elemento de liquidación de la base pensional, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado[26].

Conforme las premisas sentadas en acápite anterior, al actor por haber prestado sus servicios al sector público y ser beneficiario de la transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se le debe aplicar para regular su derecho pensional de manera íntegra, las condiciones traídas por las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, en consonancia a las sub reglas jurídicas creadas por el precedente judicial del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, que nos indican que, **el régimen de transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma**, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no solo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje.

En tal sentido, para determinar el monto de la pensión, COLPENSIONES asumió como reglas a aplicar lo contenido en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin inclusión de la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios, tales como, Prima de vacaciones, Prima de junio, Prima de servicios, Quinquenio, Prima de diciembre, Almuerzo, factores de los cuales el actor devengó en el último año de servicios (1999-2000)[27]; siendo esta exclusión una vulneración al principio de favorabilidad laboral.

En ese orden, la respuesta al problema jurídico es positiva y por tanto, le asiste derecho al actor a la reliquidación pensional pretendida, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por este durante el último año de servicio, exceptuando la bonificación especial de recreación al no ser considerada como salario. Se hace la precisión que COLPENSIONES deberá descontar el respectivo porcentaje por concepto

[26] Sentencia de Unificación 4 de agosto de 2010, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Sala Plena, Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09, C. P. Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA.
[27] Ver folio 36 cuaderno de primera instancia.

de aportes a pensión sobre aquellos factores salariales que no le hicieron los descuentos para tal efecto.

Ahora bien, se observa que el A quo liquidó en concreto las mesadas pensionales que resultan de la nueva base de liquidación de la pensión de vejez con inclusión de los factores salariales atrás anotados. Sobre el particular, el Tribunal no se opone a que se haga este ejercicio con miras a que el derecho reconocido quede explícitamente cuantificado, sin embargo, se percata esta Sala que el juez de primera instancia omitió exponer y anunciar las operaciones aritméticas que provocaron el resultado de la cuantía establecida, esto es, la suma de $1.303.444.

Pese a lo anterior, este Tribunal solicitó el apoyo a la Contadora vinculada a esta Corporación para que realizara el respectivo cálculo de la reliquidación, del cual se obtuvo los siguientes resultados:

FACTOR SALARIAL	**AÑO 1999 (01 DE FEBRERO)**	**AÑO 2000 (31 DE ENERO)**
Sueldo básico	550.779,00	550.779,00
Almuerzo	21.451,00	21.451,00
Sueldo de Vacaciones	41.092,50	-
Prima de Vacaciones	51.365,67	-
Bonificación por Servicios	22.949,08	-
Prima de junio	55.646,17	111.891,00
Prima de Servicio	24.799,25	113.594,00
prima de Navidad 1/12	55.945,33	-
Quinquenio	51.365,67	

2000	**2**	2014	3	59,07	**115,71**		$651.690,33
2000	**3**	2014	3	60,08	**115,71**		$651.690,33
2000	**4**	2014	3	60,68	**115,71**		$651.690,33
2000	**5**	2014	3	60,99	**115,71**		$651.690,33
2000	**6**	2014	3	60,98	**115,71**		$651.690,33
2000	**M13**	2014	3	60,98	**115,71**		$651.690,33
2000	**7**	2014	3	60,96	**115,71**		$651.690,33
2000	**8**	2014	3	61,15	**115,71**		$651.690,33
2000	**9**	2014	3	61,41	**115,71**		$651.690,33
2000	**10**	2014	3	61,5	**115,71**		$651.690,33
2000	**11**	2014	3	61,71	**115,71**		$651.690,33
2000	**12**	2014	3	61,99	**115,71**	8,75%	$651.690,33
2000	**M14**	2014	3	61,99	**115,71**		$651.690,33
	1			62,64			
2001	**2**	2014	3	63,83	**115,71**		$708.713,23
2001	**3**	2014	3	64,77	**115,71**		$708.713,23
2001	**4**	2014	3	65,51	**115,71**		$708.713,23
2001	**5**	2014	3	65,79	**115,71**		$708.713,23
2001	**6**	2014	3	65,82	**115,71**		$708.713,23
2001	**M13**	2014	3	65,82	**115,71**		$708.713,23

2001	**7**	2014	3	65,89	**115,71**		$708.713,23
2001	**8**	2014	3	66,06	**115,71**		$708.713,23
2001	**9**	2014	3	66,3	**115,71**		$708.713,23
2001	**10**	2014	3	66,43	**115,71**		$708.713,23
2001	**11**	2014	3	66,5	**115,71**		$708.713,23
2001	**12**	2014	3	66,73	**115,71**	7,65%	$708.713,23
2001	**M14**	2014	3	66,73	**115,71**		$708.713,23
	1			67,26			
2002	**2**	2014	3	68,11	**115,71**		$762.929,80
2002	**3**	2014	3	68,59	**115,71**		$762.929,80
2002	**4**	2014	3	69,22	**115,71**		$762.929,80
2002	**5**	2014	3	69,63	**115,71**		$762.929,80
2002	**6**	2014	3	69,93	**115,71**		$762.929,80
2002	**M13**	2014	3	69,93	**115,71**		$762.929,80
2002	**7**	2014	3	69,94	**115,71**		$762.929,80
2002	**8**	2014	3	70,01	**115,71**		$762.929,80
2002	**9**	2014	3	70,26	**115,71**		$762.929,80
2002	**10**	2014	3	70,66	**115,71**		$762.929,80
2002	**11**	2014	3	71,2	**115,71**		$762.929,80
2002	**12**	2014	3	71,4	**115,71**	6,99%	$762.929,80
2002	**M14**	2014	3	71,4	**115,71**		$762.929,80
	1			72,23			
2003	**2**	2014	3	73,04	**115,71**		$816.258,59
2003	**3**	2014	3	73,8	**115,71**		$816.258,59
2003	**4**	2014	3	74,65	**115,71**		$816.258,59
2003	**5**	2014	3	75,01	**115,71**		$816.258,59
2003	**6**	2014	3	74,97	**115,71**		$816.258,59
2003	**M13**	2014	3	74,97	**115,71**		$816.258,59
2003	**7**	2014	3	74,86	**115,71**		$816.258,59
2003	**8**	2014	3	75,1	**115,71**		$816.258,59
2003	**9**	2014	3	75,26	**115,71**		$816.258,59
2003	**10**	2014	3	75,31	**115,71**		$816.258,59
2003	**11**	2014	3	75,57	**115,71**		$816.258,59
2003	**12**	2014	3	76,03	**115,71**	6,49%	$816.258,59
2003	**M14**	2014	3	76,03	**115,71**		$816.258,59
	1			76,7			
2004	**2**	2014	3	77,62	**115,71**		$869.233,77
2004	**3**	2014	3	78,39	**115,71**		$869.233,77
2004	**4**	2014	3	78,74	**115,71**		$869.233,77
2004	**5**	2014	3	79,04	**115,71**		$869.233,77
2004	**6**	2014	3	79,52	**115,71**		$869.233,77
2004	**M13**	2014	3	79,52	**115,71**		$869.233,77
2004	**7**	2014	3	79,5	**115,71**		$869.233,77
2004	**8**	2014	3	79,52	**115,71**		$869.233,77
2004	**9**	2014	3	79,76	**115,71**		$869.233,77
2004	**10**	2014	3	79,75	**115,71**		$869.233,77
2004	**11**	2014	3	79,97	**115,71**		$869.233,77
2004	**12**	2014	3	80,21	**115,71**	5,50%	$869.233,77
2004	**M14**	2014	3	80,21	**115,71**		$869.233,77
	1			80,87			
2005	**2**	2014	3	81,7	**115,71**		$917.041,63
2005	**3**	2014	3	82,33	**115,71**		$917.041,63
2005	**4**	2014	3	82,69	**115,71**		$917.041,63

2005	**5**	2014	3	83,03	**115,71**		$917.041,63
2005	**6**	2014	3	83,36	**115,71**		$917.041,63
2005	**M13**	2014	3	83,36	**115,71**		$917.041,63
2005	**7**	2014	3	83,4	**115,71**		$917.041,63
2005	**8**	2014	3	83,4	**115,71**		$917.041,63
2005	**9**	2014	3	83,76	**115,71**		$917.041,63
2005	**10**	2014	3	83,95	**115,71**		$917.041,63
2005	**11**	2014	3	84,05	**115,71**		$917.041,63
2005	**12**	2014	3	84,1	**115,71**	4,85%	$917.041,63
2005	**M14**	2014	3	84,1	**115,71**		$917.041,63
	1			84,56			
2006	**2**	2014	3	85,11	**115,71**		$961.518,15
2006	**3**	2014	3	85,71	**115,71**		$961.518,15
2006	**4**	2014	3	86,1	**115,71**		$961.518,15
2006	**5**	2014	3	86,38	**115,71**		$961.518,15
2006	**6**	2014	3	86,64	**115,71**		$961.518,15
2006	**M13**	2014	3	86,64	**115,71**		$961.518,15
2006	**7**	2014	3	87	**115,71**		$961.518,15
2006	**8**	2014	3	87,34	**115,71**		$961.518,15
2006	**9**	2014	3	87,59	**115,71**		$961.518,15
2006	**10**	2014	3	87,46	**115,71**		$961.518,15
2006	**11**	2014	3	87,67	**115,71**		$961.518,15
2006	**12**	2014	3	87,87	**115,71**	4,48%	$961.518,15
2006	**M14**	2014	3	87,87	**115,71**		$961.518,15
	1			88,54			
2007	**2**	2014	3	89,58	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**3**	2014	3	90,67	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**4**	2014	3	91,48	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**5**	2014	3	91,76	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**6**	2014	3	91,87	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**M13**	2014	3	91,87	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**7**	2014	3	92,02	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**8**	2014	3	91,9	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**9**	2014	3	91,97	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**10**	2014	3	91,98	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**11**	2014	3	92,42	**115,71**		$1.004.594,16
2007	**12**	2014	3	92,87	**115,71**	5,69%	$1.004.594,16
2007	**M14**	2014	3	92,87	**115,71**		$1.004.594,16
	1			93,85			
2008	**2**	2014	3	95,27	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**3**	2014	3	96,04	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**4**	2014	3	96,72	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**5**	2014	3	97,62	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**6**	2014	3	98,47	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**M13**	2014	3	98,47	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**7**	2014	3	98,94	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**8**	2014	3	99,13	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**9**	2014	3	98,94	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**10**	2014	3	99,28	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**11**	2014	3	99,56	**115,71**		$1.061.755,57
2008	**12**	2014	3	100	**115,71**	7,67%	$1.061.755,57
2008	**M14**	2014	3	100	**115,71**		$1.061.755,57
	1			100,59			

2009	**2**	2014	3	101,43	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**3**	2014	3	101,94	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**4**	2014	3	102,26	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**5**	2014	3	102,28	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**6**	2014	3	102,22	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**M13**	2014	3	102,22	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**7**	2014	3	102,18	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**8**	2014	3	102,23	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**9**	2014	3	102,12	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**10**	2014	3	101,99	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**11**	2014	3	101,92	**115,71**		$1.143.192,22
2009	**12**	2014	3	102	**115,71**	2,00%	$1.143.192,22
2009	**M14**	2014	3	102	**115,71**		$1.143.192,22
	1			102,7			
2010	**2**	2014	3	103,55	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**3**	2014	3	103,81	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**4**	2014	3	104,29	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**5**	2014	3	104,4	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**6**	2014	3	104,52	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**M13**	2014	3	104,52	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**7**	2014	3	104,47	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**8**	2014	3	104,59	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**9**	2014	3	104,45	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**10**	2014	3	104,36	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**11**	2014	3	104,56	**115,71**		$1.166.056,07
2010	**12**	2014	3	105,24	**115,71**	3,17%	$1.166.056,07
2010	**M14**	2014	3	105,24	**115,71**		$1.166.056,07
	1			106,19			
2011	**2**	2014	3	106,83	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**3**	2014	3	107,12	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**4**	2014	3	107,25	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**5**	2014	3	107,55	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**6**	2014	3	107,9	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**M13**	2014	3	107,9	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**7**	2014	3	108,05	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**8**	2014	3	108,01	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**9**	2014	3	108,35	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**10**	2014	3	108,55	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**11**	2014	3	108,7	**115,71**		$1.203.020,04
2011	**12**	2014	3	109,16	**115,71**	3,73%	$1.203.020,04
2011	**M14**	2014	3	109,16	**115,71**		$1.203.020,04
	1			109,96			
2012	**2**	2014	3	110,63	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**3**	2014	3	110,76	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**4**	2014	3	110,92	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**5**	2014	3	111,25	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**6**	2014	3	111,35	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**M13**	2014	3	111,35	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**7**	2014	3	111,32	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**8**	2014	3	111,37	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**9**	2014	3	111,69	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**10**	2014	3	111,87	**115,71**		$1.247.892,69
2012	**11**	2014	3	111,72	**115,71**		$1.247.892,69

2012	**12**	2014	3	111,82	**115,71**	2,44%	$1.247.892,69
2012	**M14**	2014	3	111,82	**115,71**		$1.247.892,69
	1			112,15			
2013	**2**	2014	3	112,65	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**3**	2014	3	112,88	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**4**	2014	3	113,16	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**5**	2014	3	113,48	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**6**	2014	3	113,75	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**M13**	2014	3	113,75	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**7**	2014	3	113,8	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**8**	2014	3	113,89	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**9**	2014	3	114,23	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**10**	2014	3	113,93	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**11**	2014	3	113,68	**115,71**		$1.278.341,27
2013	**12**	2014	3	113,98	**115,71**	1,94%	$1.278.341,27
2013	**M14**	2014	3	113,98	**115,71**		$1.278.341,27
	1			114,54			
2014	**2**	**2014**	**3**	**115,26**	**115,71**		**$1.303.141,09**

En ese orden de ideas, en vista que la liquidación efectuada por este Tribunal conforme las razones jurídicas y materiales atrás expuestas, es igual a la arrojada por el A quo, es necesario acoger tal cuantificación del derecho pensional, y en consecuencia, se confirmará en todas sus partes la providencia apelada.

2.3. CON RELACIÓN A LA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. en concordancia con los artículos 365 y 366 del C.G.P. y por la no prosperidad del recurso, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada apelante, a favor del demandante. En firme la presente providencia, realícese por el *A quo*, la liquidación correspondiente, conforme lo regulado en las normas ya citadas.

3. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE – SALA TERCERA DE DECISIÓN ORAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

FALLA:

PRIMERO: **CONFÍRMESE** en todas sus partes la sentencia de 23 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, por las consideraciones expuestas

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas de segunda instancia a la parte demandada apelante y a favor del demandante. En firme la presente providencia, por el *A quo*, **REALÍCESE** la liquidación correspondiente.

TERCERO: En firme este fallo, **DEVUÉLVASE** al Despacho de origen, **CANCÉLESE** su radicación, previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI.

Se deja constancia que el proyecto de esta providencia fue discutido y aprobado por la Sala en sesión de la fecha, según consta en el acta Nº 130.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS

RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY

SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOZA